

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público



Juzgado Diecinueve Civil Municipal

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021).

Proceso Nro.	: 11001-40-03-019-2016-01383-00.
Clase de proceso	: Ejecutivo Singular
Demandante	: Bancoomeva S.A.
Demandados	: Melltex S.A.S. y otro
Asunto	: Sentencia

I. Objeto a Decidir

Procede el Juzgado a proferir la correspondiente sentencia, resolviendo la excepción de mérito que, en oportunidad propuso el curador designado para representar al demandado GUILLERMO ACOSTA HERNÁNDEZ, lo anterior de conformidad con lo establecido en el numeral 2º del artículo 278 del Código General del Proceso.

II. Antecedentes

A).- Demanda:

BANCOOMEVA S.A., por intermedio de apoderado, presentó demanda contra MELLTEX S.A.S. y GUILLERMO ACOSTA HERNÁNDEZ para obtener el pago de las sumas de dinero contenidas en los pagarés aportados como base de la acción No. 28587052-00, No. 2847590400 y No. 2847591000, en cuanto a este último, únicamente respecto de la sociedad ejecutada.

B).- Admisión y Contestación:

1.- Asumido el conocimiento de la demanda que desata la presente litis, el Juzgado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 422 del Código General del Proceso, libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva de menor cuantía a favor BANCOOMEVA S.A. y en contra de MELLTEX S.A.S. y GUILLERMO ACOSTA HERNÁNDEZ, para que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de dicha determinación, cancelaran las sumas indicadas en la orden de apremio de fecha 2 de diciembre de 2016 (fls 35 fte. y vto y 36).

2.- Por auto de fecha 8 de agosto de 2018 (fl.124), se aceptó la subrogación legal del crédito hasta por la suma de \$12.750.000, e igualmente la cesión efectuada

por el FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A. a CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA.

3.- Atendiendo que no fue posible notificar personalmente al extremo demandado, mediante proveído del 10 de junio de 2019 (fl.117) se decretó el emplazamiento de los mismos.

4.- El apoderado de la parte actora cumplió con la carga procesal conforme se verifica a folio 132 y 133 aportando constancia de la publicación del emplazamiento en el periódico El Espectador, por su parte la secretaria del Juzgado, efectuó la correspondiente inclusión en el Registro de Personas Emplazadas (fls.136 fte y vto).

5.- Transcurrido el término del emplazamiento previsto en el art. 108 del Código General del Proceso, sin que compareciera el extremo demandado a hacerse parte en el presente proceso, por auto de fecha 17 de octubre de 2019 (fl.137), el Juzgado les designó *curador – ad litem*; sin embargo, atendiendo que la comunicación enviada al auxiliar designado fue devuelta, se procedió a su relevo nombrando -auto 5 diciembre 2019-, no obstante, el profesional manifestó y justifico en debida forma su no aceptación, por lo que por auto del 3 marzo de 2020 se designó al abogado RODRIGO ERNESTO SÁNCHEZ VARGAS (fl.153), quien se notificó personalmente del mandamiento de pago, el 13 de marzo de 2020 (fl.155).

6.- Dentro del término de traslado el curador formuló la excepción de mérito de prescripción de la acción cambiaria (fls. 158 y 159).

7.- El apoderado de la parte demandante mediante memorial recibido vía correo electrónico el 24 de julio de 2020, manifestó que de conformidad con lo previsto en el Decreto 806 de 2020 (fl.156 y 159) procedería a notificar al extremo pasivo a la dirección electrónica melltex@hotmail.com.

8.- Por auto calendado 23 de septiembre de 2020 se dispuso requerir a la parte actora para que informara de las gestiones adelantadas a fin de notificar a la sociedad demandada (fl. 161), al mismo se dio contestación allegando las documentales que daban cuenta de ello (fls. 162 a 166) y en tal virtud el despacho, por auto de fecha 27 de octubre de 2020 (fl.167) dispuso tener por notificada a MELLTEX S.A.S. a través de correo electrónico de acuerdo con lo previsto en el art. 8 del Decreto 806 de 2020 y se ordenó notificar a la persona natural demandada.

9.- Frente a lo anterior, la parte actora manifestó no contar con nuevas direcciones para notificar al demandado GUILLERMO ACOSTA HERNÁNDEZ, solicitando que se continuara con el trámite del proceso. (fls.184 a 186), razón por la cual mediante proveído del 28 de enero de 2021 (fl. 187) se requirió al curador designado para que informara si se ratificaba del escrito de contestación, quien manifestó que se ratificaba en calidad de apoderado (sic) del señor ACOSTA HERNÁNDEZ (fl.189).

10.- Del medio exceptivo propuesto, se ordenó correr traslado (fl.191) y el apoderado de la parte demandante en oportunidad recorrió el mismo,

oponiéndose a la prosperidad de la excepción propuesta en tanto afirmó que el extremo demandado realizó pagos el 14 de marzo y 17 de abril de 2017 (fls.193 a 198).

11.- Ahora bien, a partir del 1 de enero de 2016 entró en vigencia el Código General del Proceso en todo el territorio nacional, de manera que habiendo sido sometida la demanda a reparto el 30 de noviembre de 2016 (fl.33), corresponde dar aplicación en su integridad las normas procesales allí previstas, de este modo, según lo dispuesto en el nuevo estatuto, surtido el traslado de las excepciones de mérito “el juez citará a la audiencia prevista en el artículo 392, cuando se trate de procesos ejecutivos de menor cuantía [Núm. 2 artículo 443].

Bajo ese entendido, el artículo 3 del nuevo ordenamiento jurídico, consagra como principio del régimen procedimental que “las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva”; disposición que se acompasa con lo establecido en el art. 278 *ejusdem*, el cual contempla igualmente que, el Juez podrá dictar sentencia anticipada, en cualquier estado del proceso, en los siguientes eventos: “2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.”, supuestos que de contera conllevan a la pretermisión de etapas procesales establecidas para su cumplimiento, mismas que sin embargo y, en aplicación a los principios de celeridad y por economía procesal, el legislador previó los eventos en los que se puede obviar su realización¹.

Así pues, revisado el asunto bajo análisis, observa el Juzgado que las documentales obrantes en el expediente son suficientes para resolver de fondo el asunto, amén que ninguna de las partes solicitó el decretó de otras diferentes a las ya obrantes en el proceso, por lo tanto, no se considera necesario decretar y practicar otras pruebas, razón por la que encontrándose vencido el traslado de la demanda, se procederá a dictar sentencia por escrito.

III. Problema Jurídico

El problema jurídico a resolver en este caso es determinar si se debe ordenar seguir adelante la ejecución por reunirse los requisitos para ello, o si el medio exceptivo propuesto por la pasiva logra enervar la obligación contenida en los títulos báculo de la acción ejecutiva.

IV. Consideraciones

1.- En el presente asunto no existe la posibilidad de formular objeción alguna respecto de la presencia de los presupuestos jurídico-procesales requeridos para la correcta conformación del litigio, toda vez que se cuenta con una demanda correctamente formulada; con la capacidad de las partes para obligarse y para comparecer al proceso, así como con la competencia del esta juzgadora para definir el asunto dejado a su consideración, atendiendo el factor objetivo de la cuantía.

¹ CSJ Civil, 15/Agosto/2017, Rad. 11001-02-03-000-2016-03591-00, Luis Alonso Rico Puerta, posición reiterada en sentencia por la CSJ Civil, 3/Noviembre/2017, Rad. 11001-02-03-000-2017-01205-00, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

2.- Se observa que los elementos de la acción ejecutiva se presentan sin ambigüedad alguna, ya que los documentos presentados como base de las pretensiones cumplen con las exigencias generales y particulares establecidas en los artículos 621 y 709 del estatuto mercantil, que además de dar contener obligaciones claras, expresas y exigibles provenientes del deudor, constituyen plena prueba en su contra, lo que autoriza a la parte demandante para formular la acción cambiaria por la vía ejecutiva al tenor del precepto 422 de la normatividad procesal civil. Igualmente, goza de la presunción de autenticidad, tal como lo disponen los cánones 244 ibídem y 793 del Código de Comercio.

3.- Ahora, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 619 del estatuto mercantil: *"Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación, y de tradición o representativos de mercancías."*, norma en virtud de la cual debemos desarrollar el principio de la literalidad que delimita el contenido, la extensión y la modalidad del derecho que se incorpora en el título valor. Sin embargo, el obligado cambiario puede invocar en su defensa las excepciones establecidas en el Art. 784 del C. de Co.

4.- En este orden de ideas, procede esta instancia a resolver la excepción de prescripción, así:

4.1.- Prescripción de la acción cambiaria:

El artículo 2513 del Código Civil consagra que *"El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio"*, y de conformidad con el artículo 2535 del mismo código, la prescripción que extingue las acciones o derechos de otros, exige sólo el transcurso de cierto tiempo que, en cada caso, es fijado expresamente por el legislador. Es así como el artículo 789 del Código de Comercio establece en tres (3) años el término prescriptivo de la acción cambiaria directa, contabilizados a partir del día de vencimiento.

Para el caso sub-examine, debe tenerse en cuenta que, el inciso primero del artículo 94 del Código General del Proceso es claro al señalar que: *"La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella, o el de mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado."* (Subrayado y negrillas fuera del texto).

5.- En el asunto objeto de análisis, se evidencia que la ejecución se encuentra respaldada en el ejercicio de la acción cambiaria con la finalidad de obtener el pago del derecho crediticio incorporado en los pagarés No. 28587052-00, No. 2847590400 y No. 2847591000, los que una vez revisados revelan como fecha de vencimiento el 26 de octubre de 2016, data desde la que una vez efectuado el respectivo computo se concluye que el período prescriptivo estaría llamado a configurarse el 26 de octubre de 2019.

Es necesario advertir que, el Art. 2539 del Código Civil dispone: *"La prescripción que extingue las acciones ajenas, puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente."*

Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente.”

6.- Sin embargo, la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, en reiteradas oportunidades al interpretar las normas que regulan el término extintivo, ha señalado que dicho plazo no opera de manera automática, sino que debe observarse desde una perspectiva subjetivista, cuyo fin es el de evitar las consecuencias nocivas de demandas que se interponen con premeditada tardanza, pero también la extinción de derechos sustanciales, por causas no atribuibles a quien legítimamente los reclama, así:

“... la interrupción civil – tiene dicho la Corte- de la prescripción tanto adquisitiva como extintiva, a consecuencia de la interposición de la demanda no se consuma con la sola presentación de la demanda, sino en el momento en el que se notifica al demandado, salvo que el retardo en notificar a este no se deba a culpa del demandante, por no haber realizado la actividad necesaria para que dicha notificación se efectuara, sino al demandado, por haber eludido esta, o al personal del juzgado encargado de hacerla, casos estos en los cuales la interrupción se entiende consumada con la presentación de la demanda” (G.J. números 2032, pág. 634 y 658; 2050 pág. 660; 2154, pág 132; 2318, pág. 120)”

“Es decir, que si a pesar de la diligencia del actor, el auto admisorio de la demanda no logra notificarse en tiempo a los demandados debido a evasivas o entorpecimiento de estos o por demoras de la administración de justicia o de otro tipo, que no sean imputables al reclamante, el ejercicio oportuno de la acción con la presentación de la demanda tiene la virtud de impedir que opere la caducidad. Este criterio conserva plena vigencia, por estar inspirado en los supremos ideales de justicia y equidad, adaptados al derecho objetivo, a tal punto que a pesar de la doctrina antigua consideró que el concepto de caducidad estaba ligado a la idea de plazo extintivo e improrrogable – cuyo vencimiento produce el decaimiento de la acción de manera inevitable y sin tomar en consideración la actividad del juez o de las partes-, ello no fue obstáculo para que esa noción eminentemente teórica o especulativa cediera su rigor ante los supuestos concretos que plantea la realidad que está a la base del derecho actual”². (subrayas fuera de texto)

De ahí que la correcta interpretación de la norma que rige el caso, impone al juez la obligación de tomar en consideración las referidas circunstancias subjetivas, a fin de no endilgar a la parte demandante unas consecuencias nocivas que no le son en modo alguno atribuibles por no ser producto de su negligencia³.

7. A efectos de desatar la excepción que es materia del debate por la parte demandada, debe compararse la fecha de vencimiento de las obligaciones que se cobran, la fecha de presentación del libelo y cuál hipótesis de las contenidas en el artículo 94 reseñado se cumple, según la fecha de notificación del mandamiento ejecutivo al demandado, así como si la tardanza en las notificaciones, fue o no por la negligencia del acreedor.

Del escrito genitor se tiene que la fecha de vencimiento de los títulos valores fueron en las que el demandante declaró vencido el plazo, esto es, el 26 de

² Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil – STC14529-2018 Radicación n. 11001-02-03-000-2018-02989-00 del 7 de noviembre de 2018 M.P Ariel Salazar Ramírez.

³ Sentencia de Casación SC5755-2014, dictada el 9 de mayo de 2014 dentro del radicado 11001-31-10-013-1990-00659-01

³ Folios 8 a 9 cuaderno principal

octubre de 2016, por lo que el término prescriptivo tendría lugar el 26 de octubre de 2019.

A su vez, la demanda que desató la litis fue presentada el 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 (Acta individual de reparto folio 33), y se libró orden compulsiva el 2 de diciembre de 2016, notificándose ésta última por estado del 5 de diciembre de la misma anualidad (fl.35 fte y vto), de manera que la interrupción solo operaría si el acto de intimación se presentara dentro de esa anualidad, es decir, hasta el 5 de diciembre de 2017.

Sin embargo, la parte convocada por intermedio de *curador ad-litem*, fue notificada hasta el 13 de marzo de 2020 [Folio 155], es decir, cuando ya había vencido el año que estipula la norma para que la presentación de la demanda interrumpiera la prescripción y para dicha data, en principio, ya se había configurado el fenómeno de acaecimiento, de no ser porque existen plazos que deben descontarse del mentado término.

En efecto, la demora en el enteramiento del extremo ejecutado, observa el Despacho no se debió a la incuria o negligencia de la ejecutante, sino a tardanzas atribuibles a la administración de justicia, pues éste luego de intentar a partir del 19 de diciembre de 2017 la notificación personal del extremo demandado, previo a que se configurara el fenómeno de decaimiento, solicitó su emplazamiento y presentó las correspondientes publicaciones del mismo, pero sólo en proveído del 17 de octubre de 2019 se procedió a designarle Curador Ad Litem para que concurriera a notificarse de la orden de pago y los representara en el proceso.

Adviértase que desde que se designó Curador Ad - litem, hasta el momento en que se notificó el auxiliar de la justicia RODRIGO ERNESTO SÁNCHEZ VARGAS (13 de marzo de 2020), transcurrieron casi cinco (5) meses, como quiera que el que se nombró no concurrió a tomar posesión tal como se desprende del plenario.

Por tanto, es posible concluir que efectivamente la parte demandante asumió las cargas procesales que le eran propias, pues antes de que venciera el término consagrado por el legislador para impedir que operara la prescripción (26 de octubre de 2020), procuró no solo la notificación del demandado GUILLERMO ACOSTA HERNÁNDEZ, sino que ante el resultado negativo de la misma, pidió el emplazamiento del ejecutado y la designación de un *curador ad-litem*, razón por la cual y teniendo en cuenta que en el presente caso se dan los presupuestos exigidos del precedente jurisprudencial antes citado, impide que la excepción de prescripción pueda prosperar.

Los anteriores razonamientos se consideran suficientes para declarar infundada la excepción de mérito analizada y, en consecuencia, se ha de ordenar seguir adelante con la ejecución en la forma dispuesta en el mandamiento de pago.

8. Finalmente, por cuanto por auto del 27 de octubre de 2020 se dio por notificada a la sociedad MELLTEX S.A.S. de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Decreto 806 de 2020 (fl.167), y dentro del término concedido no propuso excepciones, por economía procesal se procederá a dictar sentencia respecto de la totalidad del extremo demandado.

V. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto anteriormente, el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bogotá, D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE:

PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADA la excepción de prescripción propuesta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión judicial.

SEGUNDO.- Seguir adelante con la ejecución en contra de los demandados MELLTEX S.A.S. y GUILLERMO ACOSTA HERNÁNDEZ, en la forma y términos señalados en el mandamiento de pago adiado 2 de diciembre de 2016 [Folio 35 fte y vto y 36 Cd. 1].

TERCERO.- PRACTICAR la liquidación del crédito de conformidad con lo previsto en el artículo 446 del Código General del Proceso, téngase en cuenta la manifestación efectuada por el apoderado de la parte demandante con relación a los pagos que afirmó fueron realizados por el extremo demandado el 14 de marzo y 17 de abril de 2017 (fl.193 y 194).

CUARTO.- DECRETAR el Avalúo y Remate del (los) bien(es) embargado(s) a la parte ejecutada y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el caso, para el pago de las obligaciones que aquí se encuentran a cargo de las ejecutadas.

QUINTO.- CONDENAR en costas a la parte ejecutada, las cuales serán liquidadas en su oportunidad por la secretaría. Inclúyase por concepto de agencias en derecho, la suma de \$1.800.000.oo.

Notifíquese y Cúmplase⁴

IRIS MILDRED GUTIÉRREZ
Juez

A.M.C.B.

⁴ Esta providencia se notificó por estado No. 070 de 30 junio de 2021

Firmado Por:

**IRIS MILDRED GUTIERREZ
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 019 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **90d5d126b17c2eadf0e3f9ae00a5818e9c293c5e0c354c38f27c79c124d21620**

Documento generado en 29/06/2021 03:06:50 PM